

1º.- Con fecha 10 de abril de 2019 tuvo entrada en RENFE-Operadora, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la solicitud de _____, solicitud que quedó registrada con el número 001-034061.

A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada Ley para su resolución.

2º.- En virtud de dicha solicitud de información, se solicitó acceso a la información en los siguientes términos:

“Copia de los Anexos 1, 2, 3, 4, y 5 del contrato entre Renfe Viajeros y Administración General del Estado para servicios públicos de viajeros por ffcc en periodo 2018-2027.”

3º.- Una vez analizada la solicitud, esta entidad considera que, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 19/2013, procede conceder el acceso a la información a que se refiere la petición realizada.

Consecuentemente, se acompañan los documentos solicitados, si bien, respecto de los anejos 4 y 5 se han omitido datos concretos, atendiendo a lo previsto en el artículo 14.1 h) y por los motivos que a continuación se reseñarán.

La publicidad de estos contratos viene regulada por el Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera. En concreto, en relación con las adjudicaciones directas de contratos de servicio público de transporte ferroviario, el artículo 7, apartado 3, del referido Reglamento establece que la autoridad competente debe hacer pública la información relativa al nombre de la entidad contratante, a la duración del contrato, a la descripción de los servicios de transporte de viajeros que se deben realizar, a la descripción de los parámetros de la compensación económica, a los objetivos de calidad, puntualidad y fiabilidad, a las primas y sanciones aplicables, y a las condiciones sobre los activos principales.

Sin embargo, ni la referida norma comunitaria ni la legislación española aplicable a la publicidad en materia de contratación prevén que se hagan públicos determinados datos relativos a aspectos económicos, financieros y organizativos de valor empresarial, ya que ello puede dar lugar a un ilegítimo aprovechamiento por parte de los competidores, reales o potenciales, intermodales o intramodales, incluyendo los potenciales licitadores futuros en procedimientos similares.

Sin necesidad de entrar a valorar si resultan plenamente de aplicación las limitaciones contenidas en la reciente ley sobre protección de secretos empresariales, (Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales), que establece una amplia definición, que abarca tanto los secretos comerciales como los industriales, debe tenerse en cuenta que los antes referidos anexos 4 y 5, contienen información que excede en mucho la prevista en el artículo 7 del citado Reglamento 1370/2007 y puede perjudicar los intereses comerciales de Renfe Viajeros S.M.E., S.A.

Ello es porque ponen de manifiesto datos económicos y de organización empresarial sensibles, relativos a estructura de costes y previsiones futuras de la misma, márgenes operativos en la prestación del servicio, previsiones de desempeño y resultados y otros datos operativos que dan cuenta de la organización en detalle del servicio. Estos datos son los que se han omitido.

La publicidad de estos datos tan específicos puede otorgar ventajas no justificadas a otros operadores de transporte, tanto ferroviarios como de otros modos, que compiten y competirán con la sociedad mercantil estatal Renfe Viajeros, S.A.

Se omite porque es información clave para la viabilidad del negocio y su posicionamiento frente a la competencia.

Renfe Viajeros forma parte del sector público, pero se gestiona con criterios empresariales y de gestión homologables a cualquier empresa privada, por imperativos de derecho comunitario.

El interés público se ve satisfecho sobradamente con los anejos tal y como se ponen de manifiesto. Facilitar información adicional supondría riesgo de poner a disposición de la competencia estructuras de costes, previsiones económicas y datos de mercado sensibles y mostrar las fortalezas y debilidades de negocio de una empresa que compite en el mercado de transporte con otros modos, estando prevista tanto la competencia por el mercado como la inminente competencia intramodal plena.

En este escenario, estos datos, que no afectan a lo esencial del contrato, pueden otorgar una ventaja no legítima a otros operadores. Facilitar esta concreta información supondría conceder a eventuales competidores información y herramientas de conocimiento de una empresa, que deben mantenerse reservadas, aunque las acciones estén en manos del sector público. No debe facilitarse que se diseñen estrategias partiendo de información con algún grado de privilegio. Sin perjuicio de ello, se facilitan los anejos solicitados y su contenido permite comprender plenamente cómo se ejecuta en detalle el contrato, con lo que, reiteramos, el interés público

queda totalmente satisfecho, facilitándose además información adicional a la que prevé la norma comunitaria que resulta de aplicación directa al caso.

4º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, 6 de mayo de 2019.

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

D. Ismael Táboas Suárez